



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Informe Anual de Labores 2017

del **Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación** y del
Consejo de la Judicatura Federal



Versión Ejecutiva

D.R. © Poder Judicial de la Federación

La presente edición es de carácter institucional para uso exclusivo de los servidores públicos a los que sea entregada, por lo que su tiraje se limita a 35 ejemplares. Queda prohibido el uso de los nombres contenidos en esta obra con cualquier fin que pueda implicar promoción personalizada de un servidor público.

Impreso en México

Printed in Mexico

La edición, el diseño y la impresión de esta obra estuvieron al cuidado de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Informe Anual de Labores **2017**

del **Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación** y del
Consejo de la Judicatura Federal

Versión Ejecutiva

Directorio

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente

Primera Sala

Ministra Norma Lucía Piña Hernández
Presidenta

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Segunda Sala

Ministro Eduardo Medina Mora Icaza
Presidente

Ministro José Fernando Franco González Salas
Ministro Javier Laynez Potisek
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Ministro Alberto Pérez Dayán

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente

Consejeros

Felipe Borrego Estrada
Jorge Antonio Cruz Ramos
Rosa Elena González Tirado
Martha María del Carmen Hernández Álvarez
Alfonso Pérez Daza
José Guadalupe Tafoya Hernández

Instituto Federal de Defensoría Pública

Mtro. Mario Alberto Torres López
Director General y Presidente de la Junta Directiva

Junta Directiva

Dra. Mónica González Contró
Dr. Héctor Arturo Hermoso Larragoiti
Mtro. Gonzalo Moctezuma Barragán

Dr. Alfonso Tirso Muñoz de Cote Otero
Ministro en Retiro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Mtro. Miguel Pérez López

Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles

Lic. María Esther Sandoval Salgado
Directora General

Vocales

Lic. Leopoldo Burruel Huerta
C.P. Guillermo Casas

Lic. Jaime Alejandro Gutiérrez Vidal
Lic. José Alberto Lona Sánchez

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Sala Superior

Magda. Janine Madeline Otálora Malassis
Presidenta

Magdo. Felipe Alfredo Fuentes Barrera
Magdo. Indalfer Infante Gonzales
Magdo. Felipe de la Mata Pizaña

Magdo. Reyes Rodríguez Mondragón
Magda. Mónica Aralí Soto Fregoso
Magdo. José Luis Vargas Valdez

Contenido

PALABRAS DEL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL CON MOTIVO DE SU *TERCER INFORME ANUAL DE LABORES*, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

Derechos humanos	11
Igualdad de género.....	15
Personas con discapacidad y situación de vulnerabilidad	17
Defensoría pública	19
Consolidación de la Reforma Penal	20
Transparencia, acceso a la información y difusión.....	23
Actividad jurisdiccional	26
Gestión administrativa y condiciones de acceso a la justicia federal	31
Aportaciones a los damnificados	32
Desarrollo sustentable.....	34
Vigilancia y disciplina	35
Relaciones internacionales e interinstitucionales	38

**PALABRAS DEL SEÑOR MINISTRO
LUIS MARÍA AGUILAR MORALES,
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA FEDERAL
con motivo de su *Tercer Informe Anual
de Labores*, el 15 de diciembre de 2017**

Honorables Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal;

Señoras Magistradas y Señores Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

Señoras y Señores Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito;

Distinguidos invitados especiales;

Señoras y Señores:

Cumpliendo con lo que dispone el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en mi calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, rindo hoy el Informe de Labores correspondiente al tercer año de mi gestión.

Expreso mi agradecimiento, por su presencia, al Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los representantes del Honorable Congreso de la Unión: el Señor Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; y el Señor Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; agradezco también la amable asistencia de nuestros invitados especiales.

Manifiesto mi mayor reconocimiento y gratitud, a las Señoras Ministras y Señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a las Señoras Consejeras y Señores Consejeros de la Judicatura Federal, por su invaluable apoyo en el desarrollo de las labores, tanto de este Alto Tribunal, como del Consejo, instituciones que tengo el honor de presidir. Es también un honor contar con la presencia de las Señoras Magistradas y Señores Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de los titulares de los organismos constitucionales autónomos, que nos distinguen con su visita.

Y, desde luego, en este preámbulo, agradezco y reconozco el esfuerzo de los 1,469 titulares de los 829 órganos jurisdiccionales, 261 Tribunales Colegiados de Circuito, 99 Tribunales Unitarios de Circuito y 469 Juzgados de Distrito, que desempeñan sus labores en los 32 Circuitos Judiciales en que se divide el territorio nacional, así como a quienes se desempeñan en los 38 Centros de Justicia Penal Federal, y en el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. En esos órganos jurisdiccionales se desempeñan diariamente 591 Jueces de Distrito y 882 Magistrados de Circuito, de ellos son 160 Magistradas de Circuito y 126 Juezas de Distrito.

Debo resaltar que en las Ponencias de los Señores Ministros, los Secretarios de Estudio y Cuenta se distribuyen, en total, en 59 hombres y 52 mujeres.

Mi reconocimiento desde luego a los 46,869 servidores públicos que colaboran en el Poder Judicial de la Federación. 3,582 en la Suprema Corte, 47% mujeres y 53% hombres, incluyendo a los Secretarios de Estudio y Cuenta, personal de apoyo jurisdiccional e integrantes de las 46 Casas de la Cultura Jurídica distribuidas en toda la República, y 43,287 personas que laboran en el Consejo de la Judicatura Federal. Lo que incluye a los de las instituciones Auxiliares, tales como el Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como la Contraloría del Poder Judicial de la Federación y la Visitaduría Judicial.

Muchas gracias a todos ustedes, pues tal como lo he manifestado en varias ocasiones, tengo la plena convicción de que las instituciones, con su capital humano invaluable, con el talento y el compromiso de cada una de las personas que participan en ellas, son las que sostienen y sostendrán el presente y el porvenir de México.

A continuación, daré cuenta, de la manera más breve que me he propuesto, de las principales acciones que han sido emprendidas en el último año, cuya información pormenorizada se encuentra en los anexos del Informe de este año que se ponen a su disposición.

DERECHOS HUMANOS

El impulso al respeto de los derechos humanos debe ser la razón primera de la actuación de la función jurisdiccional, por

ello, hemos considerado prioritarias todas las acciones tendientes a la promoción y el desarrollo de los derechos de las personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en general, el Poder Judicial de la Federación, trabaja para garantizar los derechos humanos a todos los habitantes de nuestro país. Con convicción y compromiso, las Señoras Ministras y los Señores Ministros, en su labor cotidiana y en sus resoluciones, incorporan la visión de los derechos fundamentales desde la perspectiva indígena, de la niñez, las mujeres, las personas mayores, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género; tomando en cuenta, siempre, el papel que juegan las víctimas en los procedimientos judiciales, a efecto de hacer posible su protección legal.

Nos hemos dado a la tarea de hacer una profunda labor en la difusión de las resoluciones y criterios de este Tribunal Constitucional, con la finalidad de dar respuesta a la sociedad de un trabajo equitativo e igualitario, basado en la dignidad humana y que permita construir respuestas adecuadas a través del trabajo judicial, atendiendo a la complejidad social, política y cultural de nuestro país.

Debo resaltar que hemos mejorado y ampliado nuestros espacios de comunicación para contar con toda una gama de espacios multimedia que ahora nos permiten tener presencia propia en todo el país, lo mismo a través de las redes sociales, que por radio, televisión y prensa escrita.

Desde el comienzo de mi administración implementamos una serie de estrategias de comunicación, principalmente en redes sociales, para estar acordes con el mundo en el que vivimos, en el que toda la información, incluido este Informe que se está transmitiendo en vivo por todas nuestras plata-

formas de comunicación, está al alcance de un clic en el celular, la tablet o la computadora personal.

Hemos consolidado nuestros espacios en redes sociales, contrario a lo que comúnmente ocurre en estos espacios, **sin pagar ningún tipo de publicidad.**

En los dos últimos años triplicamos el número de seguidores de nuestra cuenta de *Twitter* que ahora tiene más de 400 mil seguidores, una cifra que nos ubica como la cuenta con el mayor número de seguidores **de todas las Cortes Supremas** de habla hispana y la tercera del *ranking* mundial de las que usan esta red social.

Además, en la cuenta de la Suprema Corte en *Facebook* tenemos, también, casi 400 mil seguidores que comparten y reproducen por miles los materiales que difundimos sobre el quehacer del Alto Tribunal, en una especie de onda expansiva de redes que sólo en el último año nos permitió alcanzar a un público superior a los 134 millones de personas en México y el extranjero.

En radio también nos modernizamos y pusimos en marcha una amplia oferta informativa que nos permitió llegar a más de **1,440** estaciones en todo el país y que incluye programas de noticias con transmisiones en vivo, cápsulas de sentencias relevantes, *spots* y *podcast* descargables tanto en nuestro Portal de la Corte, como en formatos para redes sociales.

Todo bajo un esquema de austeridad, que implica básicamente el uso de recursos materiales y humanos propios, para acercarnos a la sociedad y poner a su alcance todo el quehacer del Máximo Tribunal del País.

Por supuesto que todo ello sumado a la información que difunden de manera permanente los reporteros de nuestra "Fuente Informativa", que dan a conocer el día a día de lo que resuelve y hace el Máximo Tribunal del País. A los reporteros les reconozco la labor que realizan y el profesionalismo con el que llevan a cabo la labor social que les ha tocado.

Del mismo modo también aprovecho para reiterarme con especial énfasis y volverme a sumar a las voces que piden "No al Silencio" y "Ni uno más" con motivo de los asesinatos de periodistas que se registraron a lo largo del presente año.

Recomiendo a los interesados en conocer la labor de la Corte que consulten nuestro Buscador Jurídico Avanzado de Derechos Humanos accesible para todo el público interesado en la Página de Internet de la Corte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación promueve una política de apertura y cooperación frente a los organismos internacionales de derechos humanos e impulsa el fortalecimiento del trabajo jurisdiccional con tales organismos.

Con la participación de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos hemos participado en no menos de 109 foros de análisis, conferencias, coloquios, Círculos de Derechos, conversatorios de sentencias, seminarios, diplomados y mesas redondas, cumpliendo con una de las tareas fundamentales: **sensibilizar a la población de los temas de defensa de los derechos humanos, particularmente, de los grupos en situación de vulnerabilidad.** Para ello también hemos realizado múltiples cursos de capacitación en la materia de derechos humanos, en los que participaron personal de la Suprema Corte de Justicia y Tribunales de diversas entidades

de la República; organizaciones de la sociedad civil y personal adscrito a entidades y dependencias del Gobierno Federal, en temas de acceso y procuración de justicia.

IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad de género no es una moda pasajera, sino que es prioritaria para el Poder Judicial de la Federación. En este rubro, debe resaltarse que el objetivo del *Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación*, es el de coordinar los esfuerzos para unificar los criterios de planeación de la estrategia para institucionalizar la perspectiva de género en este Poder del Estado Mexicano, así como dar seguimiento y evaluar las acciones y los proyectos que en esta materia se realicen. Los esfuerzos desarrollados por las *instituciones cúpula* que integran el Comité –esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, se han enfocado en lograr que la igualdad de género **adquiera vigencia real y efectiva** en el interior de cada institución; también a incentivar y fortalecer la aplicación de la perspectiva de género en las tareas jurisdiccionales, y colaborar con todos los órganos de impartición de justicia del país, en la consecución de esta meta común.

Entre las acciones emprendidas durante el presente ejercicio, debe destacarse que se aprobó la elaboración de **un Manual de Buenas Prácticas para Juzgar con Perspectiva de Género**, con el que se busca establecer una base metodológica de inclusión de la perspectiva de género desde un enfoque de derechos humanos en la labor jurisdiccional, con el aporte de quienes integran y participan en el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la

Federación, en el que se recojan, entre otras, las conclusiones a las que se arribó a partir del análisis de sentencias en las mesas de trabajo instaladas en el Tercer Encuentro Internacional "Juzgando con Perspectiva de Género".

Encuentro que congregó a más de 460 juzgadoras y juzgadores mexicanos del fuero federal y local, así como del extranjero, provenientes de países de los 5 continentes, así como representantes de la academia, del ámbito nacional e internacional, de organismos internacionales y de la sociedad civil.

Por cierto, el 10 de julio de 2017, se celebró en la Ciudad de México el lanzamiento del "Capítulo México" de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), organización no gubernamental, cuyos miembros representan a todos los niveles de los Poderes Judiciales en todo el mundo, con más de 5 mil asociadas en más de 85 países.

Con estas acciones, el Comité Interinstitucional refrenda su compromiso de institucionalizar la perspectiva de género del Poder Judicial de la Federación para avanzar hacia una impartición de justicia más igualitaria y apegada a los principios constitucionales.

Así, el Alto Tribunal ha reiterado que la obligación de las operadoras y de los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede **resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres**. Es una cuestión de educación y de cultura, tenemos que cambiar esos nocivos paradigmas.

En el Poder Judicial de la Federación hacemos eco al llamado de los organismos internacionales:¹ la violencia de género contra mujeres y niñas, incluidas todas las formas de violencia sexual, acoso sexual y violación, es una pandemia mundial y una grave violación de los derechos humanos. Debemos asegurar que **todos los casos de violencia** contra la mujer sean efectivamente investigados y que los responsables sean enjuiciados **sin impunidad**.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

En el marco del Programa Integral de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, instituido en 2016, y en virtud de las acciones que implica su operación, en mayo de 2017 se creó un área de Asesoría en Programas de Inclusión para Personas con Discapacidad, con servidores públicos especialistas en la materia.

Entre las acciones que se han instrumentado destaca la elaboración del Manual de Buenas Prácticas de Inclusión de Personas con Discapacidad en el Poder Judicial de la Federación, el cual se está formulando **en colaboración con la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos**.

Debo mencionar la asesoría y acompañamiento que se han brindado a las primeras **11 personas con discapacidad** que integran el Programa Integral de Inclusión Laboral, mediante

¹ Llamamiento conjunto de la Relatoría Especial de la ONU sobre Violencia contra la Mujer, y del Comité CEDAW, del 22 de noviembre de 2017.

el seguimiento a su proceso de integración, proporcionando las ayudas técnicas, los apoyos tecnológicos y los ajustes razonables para que dichas personas desarrollen sus funciones en igualdad de condiciones que el resto de los servidores públicos. Y debo recordarles que las plazas que ocupan estas personas son plazas que están reservadas específicamente para quienes estén en condiciones de discapacidad, lo cual desde luego no limita absolutamente que más personas con discapacidad puedan ser contratadas en cualquier otra plaza disponible.

Además, la atención y acompañamiento se han empezado a instrumentar en forma gradual en los casos de trabajadoras o trabajadores con alguna discapacidad **adquirida después de ya haber sido contratados**, para lo cual, a partir de las experiencias generadas, se han realizado los ajustes razonables en el entorno laboral del trabajador, situación que ha permitido perfilar y permear una política de inclusión en el interior del Poder Judicial de la Federación.

Me parece muy importante destacar que en el Centro de Desarrollo Infantil "Artículo 123 Constitucional" se procura facilitar la inclusión de los niños con discapacidad y generar una adecuada sinergia entre los servidores públicos que laboran en el CENDI, los padres de familia y la población infantil, a efecto de lograr en el menor tiempo posible su efectiva adaptación e inclusión a su entorno educativo.

Con esa misma preocupación e interés se dio continuidad a las tareas relacionadas con la accesibilidad en los diversos inmuebles del Poder Judicial de la Federación en todo el país. Por ejemplo, en el Edificio Sede se llevó a cabo la instalación de un sistema automatizado en las puertas de acceso a sanitarios y se instalaron sillas salva escaleras. Pronto instalare-

mos placas de identificación en sistema Braille que identifiquen los números de puertas en las oficinas del edificio. Trabajos semejantes de adecuación para personas con discapacidad se llevan a cabo en las 46 Casas de la Cultura Jurídica.

DEFENSORÍA PÚBLICA

El derecho de defensa es un derecho humano reconocido internacionalmente, y una garantía básica de la propia noción del debido proceso. Como derecho fundamental, el de defensa es una garantía inherente a todo Estado de Derecho, y condición básica de legitimidad y validez del proceso penal en todas sus fases. Por su parte, el derecho a la asistencia jurídica, también debe garantizarse a todas las personas, sin excepción, y sin ningún tipo de discriminación.

Por ello, para tener siempre el personal profesional con el más elevado nivel de preparación en la tarea de proporcionar defensa jurídica y asesoría de orientación, los miembros del Instituto se someten a una tarea continua de capacitación, la que se lleva a cabo en conjunción con el Instituto de la Judicatura Federal.

Al respecto, la **Embajada Británica en México**, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Federal de Defensoría Pública, auspiciaron la Mesa de Discusión sobre los Retos del Sistema Acusatorio y la Importancia de las Defensorías Públicas, llevada a cabo el 25 de agosto en las instalaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública. La mesa estuvo conducida por los distinguidos **Sir Nicholas John Gorrod Blake**, Juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, y **Michael Jonathan Topolski**, Juez del Circuito Sureste y Consejero de la Reina.

CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA PENAL

El Nuevo Sistema de Justicia Penal opera cotidianamente con 146 Juezas y Jueces especializados adscritos a los 38 Centros de Justicia Penal Federal en todo el país, incluyendo los que se designaron este año para desempeñar funciones de ejecución como cumplimiento a la norma.

En este periodo entraron en funciones el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones y el Centro de Justicia con residencia en **Almoloya de Juárez**, Estado de México. También se inauguraron los centros en Guanajuato, Puebla y Querétaro y, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal autorizó la creación de nuevos centros en Celaya, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Torreón, Zacatecas y Villahermosa. En el último año, el nuevo sistema conoció de 36,005 asuntos, de los cuales, 15,002 (41.7%) fueron causas penales que involucraron a 21,818 personas imputadas.

Considero de la mayor relevancia informar a ustedes que se instaló el Centro de Justicia Integral del Poder Judicial de la Federación en el Archipiélago de las Islas Marías. Con el apoyo de la Secretaría de Gobernación se pudo disponer de un solar en el que se construyeron instalaciones dignas e iguales en calidad a cualquiera de los otros Centros de Justicia en el país. Obras que se realizaron con el apoyo directo y siempre disponible de las embarcaciones de la Secretaría de Marina que facilitaron el traslado de materiales.

La celebración de audiencias es la actividad central del Sistema Acusatorio, porque concentra la actividad jurisdiccional y se materializan los principios que definen al nuevo modelo de justicia penal. Este año se realizaron 40,811 audiencias,

con una disminución en la duración promedio de las audiencias celebradas. Favoreciendo con ello el cumplimiento del principio de continuidad que exige la Norma Constitucional.

En materia de fortalecimiento del Estado de Derecho y derechos humanos, y en coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal, se realizó el "Programa de actualización en el Nuevo Sistema de Justicia Penal", dirigido a 569 Jueces y Magistrados federales con competencia en amparo penal; y el Tercer Congreso Nacional "Nuevo Sistema de Justicia Penal, desde la óptica del Juicio de Amparo".

Atendiendo a la grave problemática, generada por la delincuencia en el país, se realizó un ejercicio de análisis **sobre la operación del sistema acusatorio** ante el robo de hidrocarburos y la delincuencia organizada, que contó con la participación de asistentes de la Procuraduría General de la República, las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como Jueces y Magistrados especializados en el sistema acusatorio.

Además, se están llevando a cabo diversas jornadas de un programa denominado "Programa de Análisis de Criterios Jurisprudenciales **con las Fuerzas Armadas**", derivado de los convenios suscritos por el Consejo de la Judicatura Federal con las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, que a lo largo de este año, fortaleció el conocimiento del Debido Proceso a los altos mandos y elementos de destacamento en 31 zonas navales de la República Mexicana. **Muchas gracias a los Señores Secretarios titulares de dichas Secretarías por su interés y por favorecer la realización de estas jornadas con su personal.**

Otra vertiente importante de trabajo durante este año ha sido la colaboración con los Poderes Judiciales de las entidades federativas. Se realizaron Conversatorios Jurisdiccionales en los que participaron Juezas y Jueces federales y locales y se discutieron temas relacionados con la interacción del amparo con el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Adicionalmente, se firmó un convenio con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. (CONATRIB), con el objetivo de que las Juezas y los Jueces y Magistrados locales repliquen la metodología utilizada por el Consejo de la Judicatura Federal con las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, y difundan los criterios jurisprudenciales para seguir fortaleciendo el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales en las acciones de los cuerpos de seguridad pública de las entidades federativas.

No es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país; y reitero, nosotros, los juzgadores, cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución y esa labor no la vamos ni la podemos abandonar por cualquier crítica.

En la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal, la Justicia Federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca, siempre bajo el mandato de la Constitución, que bajo ningún concepto puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto de los derechos que el propio Constituyente ha reconocido a favor de a quien se le imputa un delito o a quien lo sufre, como es la víctima.

Los Jueces son protectores, en primer lugar, en primera instancia, de los derechos de todos, sin adjetivos, ni de los delincuentes ni de las víctimas; **sino de todos**, incluyéndolo-

los **a todos**. Y, en segunda instancia, en busca del objetivo final que es la protección de los derechos de una convivencia social pacífica, sancionando al que se le ha demostrado mediante el proceso legal correspondiente, el debido proceso, su culpabilidad, **no antes, sólo** los Jueces son los que juzgan y pueden afirmar si alguien es culpable o no de lo que se le acusa, en un entorno del debido proceso.

El sistema acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, es un sistema sustancialmente de protección de derechos fundamentales. El Alto Tribunal ha sostenido que el principio de progresividad de los derechos humanos, tutelado por nuestro artículo 1o. de la Constitución, es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana; porque su observancia exige que todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, **incrementen** gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por otro lado, les impide, en virtud de su expresión **de no regresividad**, adoptar medidas que disminuyan el nivel de protección que se ha alcanzado.

A la Justicia Federal, a los Jueces federales no nos toca más que cumplir y acatar las obligaciones que nos impone la Constitución y la ley, por la protección de los derechos de todos, de la sociedad, de los inculpados, en especial de las víctimas y en beneficio de México.

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

El acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia y una herramienta trascendental para la rendición de cuentas, lo que a su vez

resulta decisivo para fortalecer la legitimidad de las instituciones de impartición de justicia, mediante el incremento de la confianza de la sociedad en ellas. La transparencia es, en consecuencia, un valor fundamental del Estado Democrático de Derecho, y un mecanismo que debe ser el resultado de la forma en cómo se gobierna, administra y gestiona el Estado.

El año 2017 supuso la consolidación de uno de los aspectos más relevantes de la reforma constitucional y legal en materia de transparencia: la publicación de la información relacionada con las obligaciones de transparencia. Ante este escenario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había realizado acciones de adecuación normativa y estructural desde el año 2015; además, en 2016 rediseñó el Portal de Transparencia del Alto Tribunal, e inició la incorporación y actualización de la información relativa a las obligaciones de transparencia en las herramientas tecnológicas diseñadas para tal fin, reportando actualmente más de **90 mil** registros de datos e información.

Además, del total de solicitudes (unas **41 mil**) de acceso a la información, en el **92.7%** de los casos se entregó la información de manera inmediata, y el **7.3%** restante fue gestionada ante las instancias competentes de este Alto Tribunal. Sólo en el **0.13%** el peticionario manifestó inconformidad respecto de la respuesta recibida, lo que supone un alto porcentaje de conformidad con la información entregada por este Alto Tribunal o, con la respuesta en la que se expresaron el motivo y fundamento por los cuales no fue posible concederla.

De igual forma, el Consejo de la Judicatura Federal fue objeto de reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, por haber logrado un 95.87%, en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia, distinguiéndose de entre 862 sujetos obligados.

Por otra parte, con el fin de que las personas privadas de su libertad puedan contar con los elementos necesarios para una defensa adecuada, este Alto Tribunal dispuso la entrega obligatoria y gratuita de información jurídica a distintos Centros Federales y Estatales de Readaptación Social.

También, dentro de este ámbito, durante el periodo que se informa, se difundieron en vivo las 115 sesiones públicas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, más 13 sesiones solemnes. Estas emisiones constituyen el núcleo de la programación del Canal Judicial, y abonan a la transparencia de las argumentaciones, razonamientos y sentencias de nuestro Alto Tribunal. Por ello, se retransmiten por Internet y en diversos horarios del Canal, en el transcurso de la semana.

Una parte importante de la producción del Canal durante 2017 estuvo dedicada a la conmemoración de los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acontecimiento en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una participación muy importante, a través de la Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos del Centenario. **Sugiero a todo ciudadano** que sintonice el Canal Judicial y verifique las interesantes series y cápsulas que se transmiten en él, tal como la titulada: *La Constitución en su Centenario*, dedicada a analizar la génesis y principales modificaciones, de ocho artículos constitucionales de 1917 a la fecha. Así como otros muy interesantes y didácticos documentales que ahí se transmiten. Paralelamente al crecimiento de seguidores en redes y en el sitio de Internet, el Canal Judicial ha aumentado su audiencia por

televisión restringida con respecto a 2016, pues su audiencia alcanzó cerca de **6 millones** de espectadores distintos en el Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

Durante el año estadístico, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó y desarrolló diversas medidas para garantizar la impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial en los órganos jurisdiccionales.

En el transcurso del periodo que se informa, el Consejo de la Judicatura Federal determinó la instalación de 5 Tribunales Colegiados, 3 Tribunales Unitarios, 10 Juzgados de Distrito, y 1 Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, en 11 entidades federativas. Se encuentran pendientes de instalar, pero ya creados por el Consejo de la Judicatura Federal, 7 Tribunales Colegiados de Circuito, 3 Tribunales Unitarios de Circuito y 19 Juzgados de Distrito en 17 entidades federativas.

Durante 2017, **el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación** analizó y resolvió diversos asuntos que, por los temas planteados, tuvieron gran impacto en el ámbito jurídico nacional.

Tal es el caso de lo decidido en diversas acciones de inconstitucionalidad en materia penal, como es la identificada con el número 61/2016,² en la que el Pleno, al analizar la constitucionalidad de la Ley Nacional de Ejecución Penal, fijó impor-

² Resuelta en sesión de 4 de abril de 2017.

tantes precedentes en relación con los derechos de las mujeres privadas de su libertad, e invalidó una norma que restringía injustificadamente la posibilidad de acceder a la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión a las personas bajo el régimen de libertad condicionada.

En esta misma materia, en la acción de inconstitucionalidad 60/2016,³ el Pleno estudió diversos preceptos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, relacionados con el internamiento preventivo y el resguardo domiciliario y estableció las bases interpretativas para la aplicación de esas medidas cautelares en materia de justicia para adolescentes.

Es de destacarse lo resuelto por el Pleno en la acción de inconstitucionalidad 1/2015,⁴ en la que se abordó el tópico referente a si es violatorio del principio de progresividad la medida establecida en una ley estatal, que prohíbe a los miembros de las fuerzas policiales asociarse o formar sindicatos.

Entre otros de los asuntos relevantes, se encuentran la acción de inconstitucionalidad 62/2016⁵ y la contradicción de tesis 151/2016,⁶ en las que fueron sometidos al análisis de este Tribunal Pleno diversos preceptos de la Ley de Amparo. En la primera, se abordó el tema relativo a la constitucionalidad de la procedencia de la suspensión contra las técnicas de investigación y medidas cautelares, prevista en el artículo 128, tercer párrafo, de la ley de la materia. Por su parte, en la contradicción de tesis en mención, se estableció el alcance, conforme a la interpretación de este Pleno, de la expresión "resolución

³ Resuelta en sesión de 9 de mayo de 2017.

⁴ Resuelta en sesión de 11 de mayo de 2017.

⁵ Resuelta en sesión de 6 de julio de 2017.

⁶ Resuelta en sesión de 16 de noviembre de 2017.

favorable", para efectos de la procedencia del juicio de amparo, con base en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo.

También es digno de destacar que, en la acción de inconstitucionalidad 11/2016,⁷ se analizó la figura denominada **síndrome de alienación parental**, regulada en el Código Civil para el Estado de Oaxaca. En este asunto, el Pleno determinó que, en aras de proteger el interés superior del niño, resultaba constitucional regular el síndrome de alienación parental; sin embargo, consideró inválido que, en caso de tenerse por acreditada dicha conducta, tuviera como consecuencia la pérdida o suspensión de la patria potestad, pues aplicar ese tipo de sanciones en automático, no permite al Juez hacer la ponderación de la idoneidad, necesidad y eficacia de otras medidas aplicables al caso, medidas menos restrictivas y más adecuadas para la tutela efectiva de los derechos de los niños.

Asimismo, el Pleno resolvió el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 2/2017,⁸ donde determinó que los lugares, horas de salida y llegada, así como la ruta correspondiente a los **aviones de toda la flota aérea de la que dispone el Estado Mayor Presidencial**, es información de carácter reservado, en términos de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, por tanto, no es dable ponerla a disposición de un particular, atendiendo a que esa información podría develar cuestiones de seguridad nacional cuando se correlacione o concatene con otra información y poner en peligro la seguridad de la aviación de la flota del Estado Mayor Presidencial.

⁷ Resuelta en sesión de 24 de octubre de 2017.

⁸ Resuelto en sesión de 30 de octubre de 2017.

También se destaca lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 70/2016,⁹ donde se reconoció que el espectro de protección a la vida privada de los servidores públicos, si bien el umbral de protección a ese derecho se ve disminuido o atenuado en atención a su labor "pública", ellos siguen siendo sujetos de todos los derechos que la Constitución Federal y los tratados de derechos humanos tutelan; de ahí que se concluyó que la información relativa a su vida privada o datos personales no resulta necesaria para cumplir el fin de la reforma constitucional en materia de anticorrupción y, por tanto, no se encuentran obligados a divulgarlos, en términos del artículo 6o. constitucional.

En la acción de inconstitucionalidad 15/2017¹⁰ y sus acumuladas, este Pleno examinó y declaró constitucionalmente válido el proceso legislativo de la creación de la nueva Constitución de la Ciudad de México, además de analizar el nuevo sistema electoral que regirá en esa entidad federativa.

Finalmente, este Alto Tribunal resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad de materia electoral donde sentó criterios relevantes, tales como el reconocimiento de la libertad configurativa de los Estados en el tema de separación del cargo en el caso de reelección; siempre y cuando se respeten los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Además, se determinó que, a partir de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el competente para sancionar, por faltas graves, al Contralor Interno de los Institutos y Tribunales Electorales Locales.

⁹ Resuelta en sesión de 13 de junio de 2017.

¹⁰ Resuelta en sesión de 17 de agosto de 2017.

Por otra parte, entre los asuntos que fueron resueltos por las dos Salas de la Suprema Corte y de los que, en su oportunidad, han dado cuenta la Señora Ministra y el Señor Ministro Presidente, en sus respectivos Informes de Labores, se encuentran también varios de enorme importancia y trascendencia. **Reciban, Señoras Ministras y Señores Ministros, integrantes de las Salas y del Pleno, mi mayor reconocimiento por su extraordinaria labor.**

Mediante sus resoluciones, en pleno ejercicio de control constitucional, los tribunales y los Jueces, son elementos potenciadores de la legitimidad y la gobernabilidad, porque disponen de capacidad de decisión última en asuntos de alta importancia en el ejercicio del poder. Y esto es muy importante y **lo recalco**, la legitimidad misma de la autoridad se refuerza si cumple con el orden jurídico, si cumple **con las sentencias** que dicten todos y cada uno de los tribunales de nuestro país. Los tribunales constitucionales confieren legitimidad a los patrones básicos de comportamiento que requieren para que una democracia funcione.

Uno de los retos más importantes del Estado de Derecho y del Estado Democrático de Derecho, es el respeto y acatamiento de las sentencias que dictan todos y cada uno de los Jueces de este país. Si hay cumplimiento a las sentencias que finalmente son las que aplican la norma en concreto y en la realidad cotidiana, hay Estado de Derecho. **Si no se cumplen las sentencias estamos hablando de una ficción que no tiene ningún valor para la convivencia pacífica de nuestro país.** No hay sentencias mejores o peores, ni casos más importantes que otros, todos y cada uno de los asuntos que se resuelven en los Tribunales de nuestro país, merecen todos la misma importancia, y todos deben ser **cumplidos** con igual

prontitud y eficacia, especialmente, y lo recalco de nuevo, cuando el cumplimiento de esas sentencias corresponde a una autoridad.

Por eso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sanciona con gran rigor a aquellos que no cumplen las sentencias del juicio de amparo, donde el juzgador es la autoridad, por ello, la Constitución misma, ha previsto y aun en la última reforma, ha endurecido las sanciones **para quienes no cumplen con las sentencias protectoras de los más altos ideales del mundo**, los derechos de todos, los derechos humanos.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONDICIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA FEDERAL

Con miras a la consolidación de una administración basada en la eficacia, la transparencia y la eficiencia, con énfasis en la búsqueda y adopción de las mejores prácticas que contribuyan a ese tipo de gestión, en los términos planteados por el *Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018*, durante el periodo, destacan las siguientes acciones:

En días pasados, la justicia mexicana federal y local, dependencias de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales, y órganos desconcentrados quedaron **formalmente interconectados tecnológicamente**, en uno de los proyectos más ambiciosos encabezado por el Consejo de la Judicatura Federal, para dar trámite al juicio de amparo vía electrónica, que es ya una realidad y ampliar el marco protector de los derechos humanos de las personas en el país y quienes residen fuera de él.

Se trata de la concreción del *Proyecto Nacional de Interconexión Tecnológica*, programa prioritario, que no sólo hará más expeditas la tramitación y consulta de juicios de forma electrónica, sino que ahorrará el costo de la justicia a los mexicanos, puesto que ya no será necesario trasladarse a los tribunales donde se lleven sus procesos, sino que podrán desahogarlos en línea, además de que los propios justiciables estarán en posibilidades de dar seguimiento de manera transparente a la forma como actúan los juzgadores y sus representantes legales.

Con la declaratoria correspondiente, efectuada apenas el pasado 22 de noviembre, México se convierte **en el primer país en el mundo en contar con un sistema de consulta e interacción judicial**, pero sobre todo, en la captura compartida e interconectada entre todos los poderes e instituciones del país, que no tiene ninguna otra Nación del orbe. Se trata de un paso más en el camino de la justicia que en muchos sentidos definirá el presente de los mexicanos y determinará el futuro de las generaciones que están por venir, y también es la respuesta que se da a las exigencias de una sociedad cada vez más informada y demandante.

APORTACIONES A LOS DAMNIFICADOS

Aquí debo hacer una especial pausa, para reconocer la solidaridad institucional ante los estragos de la naturaleza.

Los sismos del pasado mes de septiembre, con sus efectos conocidos y vividos por muchos de los mexicanos, representan un refrendo doloroso acerca de la responsabilidad que debemos tener las instituciones del Estado y la propia sociedad para enfrentar situaciones de emergencia.

Mención especial merece en este rubro, la solidaridad de las y los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial de la Federación con las personas damnificadas, quienes atendiendo a la convocatoria realizada, participaron con la donación voluntaria de un día de su salario íntegro, además de las donaciones que hicieron en especie en los Centros de Acopio que se instalaron en diversos edificios de la Institución, con lo cual fue posible recolectar víveres, medicamentos, artículos de limpieza y material de curación, de acuerdo con el listado que proporcionó la Cruz Roja, a efecto de cubrir requerimientos identificados por dicha institución.

Asimismo, derivado de las afectaciones inherentes a los sismos de septiembre, y atendiendo al interés general y superior de la Nación, **a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**, se realizó una evaluación y el replanteamiento de diversas actividades, programas y proyectos presupuestales, especialmente en el que se han logrado ahorros sustanciales, **sin afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales**, lo cual no permite confundirlo con un subejercicio, sino calificarlo como un manejo eficiente de la administración, se ha determinado que para coadyuvar, con recursos económicos, a las acciones de atención de la población afectada, así como para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura dañada. De esa manera y con dicho criterio, en acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se autorizó la aportación, por parte de los Órganos de Gobierno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por un total de más de 2,183 millones de pesos. Recursos que han sido ya transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un pequeño acto realizado, el pasado lunes 4 de diciembre, en el Salón del Antep pleno

de este Máximo Tribunal, con la presencia del Titular de la Secretaría Doctor José Antonio González Anaya.

Los derechos humanos no desaparecen en ningún momento ni por ninguna circunstancia, ya sea un terremoto, un huracán o un tsunami. Por el contrario, tras situaciones de desastre, la protección de los derechos humanos adquiere **aún mayor relieve**, y resulta imperativo salvaguardar la dignidad de las personas afectadas.

Por tanto, en situaciones de desastre, cada acción que se emprenda en materia de preparación, respuesta, rescate y recuperación, debe llevarse a cabo teniendo como eje medular la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos.

DESARROLLO SUSTENTABLE

Creo que es importante destacar que el Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación es un instrumento creado en forma conjunta por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y dar cumplimiento a las disposiciones en el tema ambiental que establece la legislación mexicana en la materia, todas encaminadas a los mismos objetivos planteados en el programa, realizando los ajustes razonables en la totalidad de las instalaciones que permitan gradualmente alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos que en su momento trasciendan también al entorno familiar del personal del Poder Judicial de la Federación.

VIGILANCIA Y DISCIPLINA

La importancia del trabajo de los Jueces y Magistrados es fundamental para la vida democrática y para la consolidación del Estado de Derecho y, por ello, deben desempeñar su trabajo con integridad. En consecuencia, **debe castigarse toda conducta que sea contraria a los valores a los que deben sujetarse los impartidores de justicia**, así como todo servidor público del Poder Judicial de la Federación.

Durante el periodo que se reporta, se ordenó la realización de 290 procedimientos de investigación debido a quejas y denuncias, que acumuladas a las 94 existentes, se suma un total de 384. Como resultado de lo anterior, se sancionó a 407 servidores públicos y en el Registro de Servidores Públicos Sancionados se inscribieron 341 sanciones, incluidas las aplicadas por otros órganos disciplinarios del Poder Judicial de la Federación. **Es claro que en el Consejo de la Judicatura Federal no se tolera conducta alguna que sea contraria a la ley y se toman las medidas necesarias para combatirlas.**

Aquí quiero subrayar que, conforme a la obligación que tiene toda autoridad de respetar los derechos humanos de las personas, y cuyo deber compete de modo relevante al Poder Judicial de la Federación, todo procedimiento de investigación y aun aquellos de responsabilidad, tienen el ineludible compromiso de respetar el principio de presunción de inocencia de quienes están sujetos a dichos procedimientos. Pues no será sino hasta que, seguido el debido proceso legal, que el órgano correspondiente pueda determinar fundada y motivadamente que existió responsabilidad administrativa e impondrá

la sanción correspondiente. Por ello, formulo mi condena más enérgica a aquellos funcionarios o empleados que sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que sólo son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran o no generar un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público. Práctica que no sólo debe desterrarse, sino, ésa sí, sancionarse, cuando con ello se afectan los derechos fundamentales y se expone, de manera absolutamente injustificada a algún funcionario público al descrédito, sin haberse seguido un procedimiento en el que se respete el debido proceso legal.

Por su parte, en el ejercicio de las labores emprendidas en materia de anticorrupción, se determinó **por primera vez en la historia** del Consejo de la Judicatura Federal, la primera sanción en contra de un particular en el marco de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, consistente en una inhabilitación por 10 años y la aplicación de una multa económica por 109 millones de pesos.

En materia de disciplina, debe mencionarse que, con motivo de las quejas, denuncias o procedimientos disciplinarios iniciados de oficio, en este año, la Comisión de Disciplina y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo el respeto al debido proceso legal, impusieron sanciones a 76 servidores públicos adscritos a diversos órganos jurisdiccionales, siendo 7 de ellos Magistrados de Circuito, 14 Jueces de Distrito, y 55 personal subalterno. Las sanciones impuestas a los titulares van, desde apercibimientos privados, y amonestaciones, hasta suspensión en 7 casos, y un caso de destitución de un Juez

de Distrito. En el caso del personal subalterno, también fueron impuestas sanciones semejantes.

Los impartidores de justicia que tienen el privilegio de cumplir las responsabilidades del cargo, están obligados a dejarlo inmaculado cuando llegue el momento de abandonarlo".¹¹

Como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado y seguirá adoptando todas las medidas necesarias para establecer capacidades y experiencias que coadyuven a las funciones del Comité Coordinador del Sistema –previsto en la Constitución–, y del cual formamos directamente parte, como Consejo de la Judicatura Federal. Si la corrupción es ese lastre absolutamente pernicioso en cualquier ámbito, es aún más nocivo en el ejercicio de la función pública, y es imperdonable si se da en el ámbito de la impartición de justicia, porque además rompe también la independencia del Juez y, con ello, destruye la esencia misma del juzgador.

Tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad. Los Jueces obtenemos nuestra legitimación, no del voto público, sino de nuestra actuación recta, cotidiana y diaria en la resolución de sentencias de manera independiente.

¹¹ Naciones Unidas, *Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial*, Nueva York, 2013, p. 24.

RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES

Ya casi para terminar, no quisiera dejar de mencionar algunas importantes relaciones hechas y fomentadas con organismos y Jueces internacionales.

Durante 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación participó en foros académicos orientados al análisis sobre temas de trascendencia y actualidad en el ámbito jurídico. Del 17 al 19 de mayo de 2017, en Madrid, España, tuve la oportunidad de compartir, con el Presidente de la Corte Suprema de Argentina, con integrantes del Tribunal Constitucional de España y con destacados profesores e investigadores en el campo del Derecho Constitucional, **reflexiones sobre el papel de la Judicatura y de las Altas Cortes en la protección judicial de los derechos humanos.**

En el marco de este encuentro, la Suprema Corte participó también en reuniones oficiales con la Casa Real de España, con el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, así como con integrantes del Senado y del Congreso de los Diputados.

Durante la realización del XLVII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en Cancún, Quintana Roo, Cortes y Tribunales Supremos de la región, tuvimos la oportunidad de reunirnos, como institución, en Conversatorios y Encuentros con la presencia de Embajadores de Buena Voluntad de la OEA para temas ambientales y de sustentabilidad hemisférica. Encuentros que han motivado importantes reflexiones y proyectos dirigidos a mejorar el bienestar social y la conservación de la llamada "Casa Común", como iniciativa para sen-

sibilizar a nuestras sociedades sobre la importancia del medio ambiente y su preservación.

Las relaciones internacionales impulsadas durante 2017, permitieron también un mayor acercamiento con Poderes Judiciales de otros países.

Un ejemplo fue la visita recibida en el Alto Tribunal de parte de Stephen Gerard Breyer, Ministro de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Durante esta visita, la primera de un integrante del máximo tribunal norteamericano a la Corte mexicana, el Justice Breyer compartió con la Suprema Corte los obstáculos que, a lo largo de la historia, ha enfrentado la Corte estadounidense en el proceso de construcción de su legitimidad institucional, así como la relevancia que ha adquirido hoy en día el Poder Judicial como instancia acreditada para dirimir, de forma civilizada, el conflicto social. Ello durante la presentación del libro, del propio Breyer, titulado "*Cómo hacer funcionar nuestra democracia. El punto de Vista de un Juez*", en su versión en español gracias a la traducción hecha por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Dentro de las relaciones internacionales sostenidas por la Suprema Corte, en el ámbito multilateral, el Alto Tribunal continuó con su participación en la Cumbre Judicial Iberoamericana, principal foro regional que reúne a las Cortes Supremas y a los Consejos de la Judicatura.

También en el ámbito multilateral, la Suprema Corte recibió la visita de los Relatores Especiales para la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.

La desgraciada y atentatoria violencia en **contra de los profesionales de la comunicación** ha tenido un impacto significativo en el ejercicio de los profesionales de la libre expresión en México. Sin embargo, y a pesar de las dificultades observadas en el país, los Relatores Especiales destacaron la encomiable labor jurisdiccional y administrativa que ha desarrollado la Suprema Corte para promover y salvaguardar el derecho humano a la libertad de expresión. A través de sentencias garantistas, de programas de capacitación y de una mayor cercanía con la sociedad, el Alto Tribunal ha sido un firme defensor de la libre expresión de las ideas y de la importante misión social que cumplen los comunicadores en México.

Como parte de la colaboración institucional promovida por esta Suprema Corte con otras instituciones públicas y privadas; nacionales, extranjeras e internacionales, y con el ánimo de apoyar las labores de capacitación del personal de la Suprema Corte y la divulgación de la actividad institucional, en 2017 se llevó la "Tercera Edición de la Cátedra de Derechos Humanos Suprema Corte de Justicia de la Nación", en coordinación con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, para reflexionar sobre temas de la mayor importancia para el mundo jurídico

Un convenio digno de resaltarse, **porque beneficia a los jóvenes**, es el Convenio Específico de Colaboración suscrito por la Suprema Corte, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación UNAM, A.C., por el cual se creó el Programa de becas de excelencia académica "**Generación Centenario 2017**", a través del cual, se otorgan ayudas económicas para apoyar a estudiantes de Derecho inscritos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su etapa de formación académica y se favorece

una capacitación de alto nivel, así como la posibilidad de que los estudiantes interactúen con los tribunales federales para su formación. La Corte reconoce, con ello, que la educación es una ventana hacia las oportunidades de desarrollo individual y de bienestar social de una Nación.

En el ámbito de los tribunales del Poder Judicial de la Federación se ha impulsado y continuado con el Programa de Prácticas Judiciales que ahora ya está consolidado en los órganos jurisdiccionales, por lo que se incrementó el número de plazas para que 1,800 jóvenes se integren a nuestras filas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mantenido un firme interés por difundir la cultura jurídica, y por acercar a la ciudadanía el conocimiento sobre los personajes y acontecimientos que han marcado la historia nacional. En 2017, la Suprema Corte realizó un merecido homenaje a uno de los más sobresalientes juristas que ha dado nuestro país, Mariano Otero Mestas, a doscientos años de su nacimiento. Las ceremonias conmemorativas iniciaron en el Alcázar del Castillo de Chapultepec y concluyeron en el marco de la prestigiada Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A través de actos públicos, conferencias, mesas de trabajo y obras editoriales, la Suprema Corte honró la memoria del ilustre pensador, jurista y estadista jalisciense, defensor de nuestra soberanía, promotor del federalismo e impulsor con Manuel Crescencio Rejón del juicio de amparo.

Tanto la colaboración con instituciones académicas y públicas nacionales, como el acercamiento bilateral con otras Cortes y Tribunales Supremos, y la participación en foros regionales multilaterales, han dado al Alto Tribunal de nuestro país, el prestigio de una institución que salvaguarda derechos funda-

mentales y que defiende, como valor supremo de nuestra misión constitucional, la independencia judicial.

Así, las relaciones nacionales e internacionales sostenidas e impulsadas durante 2017, reflejan el interés del Poder Judicial de la Federación, por acercarse a nuestra sociedad, a los usuarios del sistema judicial; y por preservar y fortalecer la independencia de quienes imparten justicia en México.

SEÑORAS Y SEÑORES:

En los albores del seguramente complicado proceso electoral del año próximo, debe reafirmarse **que** una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica. Si así lo hacemos autoridades y ciudadanos, la cosecha de esa labor será invaluable: y lo será porque la seguridad jurídica genera certeza en todos, permite la convivencia, y mejor aún, permite la paz.

No es sólo un compromiso de la autoridad hacer bien las cosas que conforme a la Constitución y las leyes les competen. También los ciudadanos debemos estar conscientes de que cumplir con la ley, con nuestros deberes, favorece la paz social. Exijamos, sí a la autoridad, el cumplimiento de la ley, pero también seamos nosotros, como ciudadanos, conscientes de cumplir con nuestras obligaciones.

Sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley no puede haber valores básicos que respetar, no sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja.

Para que el derecho sea una realidad se necesita contar con la seguridad que permita aplicarlo, y por eso la ley, por

su naturaleza, puede ser exigida coactivamente, sancionando al que no la cumple.

En fin, esto que les he presentado no es más que una visión general de la enorme actividad que han desarrollado las dos instituciones que tengo el gran honor de presidir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. **El informe en realidad no es mío**, yo sólo lo doy a conocer, porque todos los que integran esas instituciones, las Señoras y los Señores Ministros, así como las Consejeras y Consejeros, han sido los protagonistas directos de los múltiples criterios jurídicos, actividades, avances y desarrollo que se han dado en el Poder Judicial de la Federación.

Gracias a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad jurídica en nuestro país, la mejor y más protectora forma de interpretar la Constitución Federal, así como la resolución de las controversias entre autoridades se han ampliado de manera progresiva y de avanzada como los Tribunales Constitucionales más importantes y de avanzada en el mundo. Es, sin duda, una institución confiable e imparcial, que colabora de manera directa a la paz social.

Los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal han sido actores fundamentales en el crecimiento y mejoría del sistema judicial de la Federación, pues han puesto sus empeños, sus esfuerzos y sus ideas al servicio de una institución que proporciona al pueblo de México, una justicia cercana, una justicia protectora y una confiable, vigilando y seleccionando a los juzgadores federales y proporcionando los medios materiales para lograrlo.

A las Señoras Ministras, a los Señores Ministros que me confiaron la presidencia de este Tribunal Constitucional les

agradezco su confianza, solidaridad, amistad y especialmente su apoyo, para poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto y nos señala nuestra Carta Magna.

A las Señoras Consejeras a los Señores Consejeros les agradezco también su consejo, sus cuidadosas observaciones y su invaluable apoyo para culminar tareas y emprender nuevas en favor de la Justicia Federal.

Tengamos presente que todos somos servidores de la Ley Suprema para poder ser libres; así lo dice en latín, la frase del Salón de Murales en esta sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para poder ser libres, para poder vivir en paz, para poder vivir en un verdadero Estado Constitucional de Derecho, debemos cumplir con la ley. Hagámoslo por México, todos los días, no sólo aduciéndolo en los discursos.

Muchas gracias.